



EDITORIAL

Algo huele a podrido en el Reino...

Los escándalos de corrupción se suceden y repiten, ocupando o intentándolo, toda la escena mediática. Se genera una situación en la que la reacción normal de cualquier ciudadano es decir "todos corruptos". Otros lo traducen en "PSOE; PP, la misma m. es". Es comprensible la indignación de la mayoría, que compartimos, pero no es suficiente.

Hay que preguntarse: ¿cuál es la causa, el origen, de la corrupción? Aparte de que el funcionamiento de la sociedad capitalista está fundado en ella: la extorsión de la plusvalía (el trabajo no pagado) es la base de su funcionamiento;

Pero en el estado español nos encontramos con una doble pena. El mantenimiento de una buen aparte de las instituciones franquistas, de sus modos de funcionar, y de las grandes constructoras, negocios creados sobre la base la mano de obra esclava de presos políticos, alimentadas por la obra pública, siguen ritmando la situación política.

Bajo Franco no había nada más natural que el hecho de que una gran empresa sobornara al político o minis-

tro de turno para obtener sus contratos.

Y los ayuntamientos funcionaban de esta forma con los permisos de obras (recordemos, incluso, que los concejales, incluso en las grandes ciudades, no cobraban salario, se daba por hecho que vivirían de los beneficios del cargo).

La transición -tan alabada por algunos- mantuvo una buena parte de estas prácticas, empezando por la Monarquía misma. Todo el mundo sabe de dónde viene la fortuna del emérito y nadie ignora los gastos y privilegios de la Casa Real, de sus hijas y familia en general.

El caso Montoro tiene todas las características del franquismo. Los Textos legislativos que se redactaban en el ministerio de Hacienda se hacían al dictado de las grandes empresas, para eludir impuestos.

Y esto en el momento en que Montoro exigía y aplicaba los recortes brutales contra la mayoría social. La simbiosis entre Hacienda, el bufete de Montoro (llamado Equipo Económico), y las empresas era total. Y esto atañe a toda la estructura del PP.

Sin duda, en el PSOE hay corruptos y

la responsabilidad de Sánchez es evidente a pesar de la defensa que le hace Yolanda Díaz, porque el régimen

corrompe todo lo que toca, y finalmente todo partido u organización que defienda y sostenga al régimen monárquico y viva de sus instituciones, obligatoriamente se impregna de su corrupción y de sus costumbres (quienes duden de esto, que recuerde cómo en la famosa tarjetas black estaban implicados miembros de todas las organizaciones).

¿Hay otra salida que acabar con la Monarquía y todos sus establos de Augías?

Pero para combatir la corrupción, no se puede esperar a que la monarquía caiga.

Es necesario, desde ya, combatir desde el movimiento obrero por la independencia política en relación a este régimen y para ello por la independencia financiera, y combatir contra los gastos militares - ya de por sí parasitarios- es una etapa fundamental. Esta es la vía de salud para el movimiento obrero y de los pueblos en nuestro país.

Palestina ¡Alto al genocidio!



Tanta barbarie no parece tener fin ni freno. El Ejército del Estado sionista comete uno de los crímenes más reprobables. Incapaz de acabar con la resistencia de todo un pueblo, utiliza la peor de las armas: matar por hambre a toda la población.

En la frontera de Gaza, cientos de camiones con ayuda humanitaria ven como los alimentos se pudren. Y la Fundación de Ayuda a Gaza (organi-

zada por los Estados Unidos e Israel) se convierte en una trampa mortal para los palestinos. A día de hoy, el Ejército sionista ha matado a más de mil personas que hacían cola para recibir un saco de harina.

¿Cuál es el objetivo de esta barbarie? Crear un foso infranqueable entre la población palestina y la población judía para mostrar que la convivencia es imposible, que no hay solución democrática. ¿Quién es responsable? Sin duda el Estado de Israel y el Estado norteamericano, con la complicidad los Gobiernos europeos y una buena parte de los regímenes árabes y afines.

Es imprescindible la ruptura total a todos los niveles con el Estado sionista.

¿Por qué el Gobierno espera a septiembre para que se apruebe la ley sobre el embargo de armas?

Es hoy, de inmediato. Es lo que exige el pueblo palestino y todos los judíos que rechazan a un Gobierno y un Estado que dice representarlos.



Continúa la campaña internacional por la libertad con vida del Dr. Abu Safiya

Acuerdo Gobierno central-Generalitat sobre financiación autonómica

Primeras notas sobre el «acuerdo de financiación autonómica»

Según la versión oficial ofrecida por fuentes de la Moncloa, el acuerdo alcanzado recientemente entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya va a permitir establecer «los cimientos y bases de la futura financiación singular para Cataluña en el marco de la reforma del sistema de financiación, que tiene que atender las singularidades de Cataluña y sus aspiraciones de autogobierno y autonomía fiscal, y que otorgará a la Generalitat - que defiende el principio de ordinalidad como una condición necesaria del nuevo modelo- más capacidad normativa en la gestión de los tributos». Según las mismas fuentes, «se trata de una propuesta que, como recoge el acuerdo, es compatible con una reforma general del sistema de financiación que atienda a las necesidades y singularidades de todas las comunidades autónomas».

¿Qué contempla el acuerdo?

El acuerdo contempla el despliegue de la Agencia Tributaria de Catalunya para gestionar los impuestos de forma progresiva (para lo cual se necesita impulsar unos cambios legislativos), en particular las competencias en la gestión del IRPF y lo que se pueda acordar en el futuro respecto a otros tributos.

El PP y toda la prensa de derechas no ha tardado en salir en tromba y calificar dicho acuerdo de «insolidario» y de una «concesión más a los independentistas». Por su parte, desde Catalunya los partidos independentistas lo califican de «tomadura de pelo» (Junts), mientras que ERC amenaza con no apoyar los PGE que

presente el Gobierno de Pedro Sánchez si no se respeta el acuerdo original sobre financiación que permitió que ERC apoyara la investidura de Salvador Illa.

Algunas fuentes indican que, al parecer, el Gobierno no asume ahora el principio de ordinalidad (que el mismo PSOE planteó y acordó en Granada en 2012).

¿Qué significa el principio de ordinalidad aplicado a la financiación autonómica?

Según sus defensores, la definición más común es aquella en la que se considera que debe aplicarse un límite a la solidaridad entre comunidades para impedir que las más ricas, las que más aportan al sistema, acaben por ello teniendo menos dinero por habitante que las que menos aportan, o vean cercenadas sus posibilidades de desarrollo por un exceso de solidaridad. Según esto, la solidaridad debe ir de la mano de la ordinalidad para garantizar un desarrollo equilibrado.

En principio suena hasta lógico. Sin embargo, hay que decir que dentro de la lógica capitalista, en realidad sirve para perpetuar territorios ricos y territorios pobres sin solución de cambio. Así ocurre en los territorios donde se aplica a rajatabla (Alemania, por ejemplo). Que sea más justo que lo que hay ahora (que lo es si se aplica bien), no quiere decir que sea la mejor solución.

Todos los pueblos de España

Quieren tener servicios públicos dignos, con recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la pobla-

ción. Lo que quiere decir en primera instancia revertir todos los recortes que ha padecido la sanidad, la enseñanza, etc., en los últimos años. Necesitan tener buenas infraestructuras, tener acceso a la vivienda en condiciones asumibles y que no hipotequen a las familias de por vida.

Ante la posición falsaria y cínica del PP en el debate sobre financiación autonómica, el Gobierno de Pedro Sánchez «contraatacó» proponiendo en la Conferencia de Presidentes Autonómicos un Plan de Vivienda de 7.000 millones de euros, comprometiéndose el Gobierno a hacerse cargo de 4.000 a condición de que el resto fuera asumido por la Comunidades Autónomas. Que esto representa más de lo que se haya puesto nunca encima de la mesa, no hay duda. Como tampoco hay duda de que es insuficiente. La política de rearme impuesta a todos los Gobiernos ha supuesto de momento para España dedicar más de 10.000 millones a los que debe añadirse los 10.471 anunciados en mayo por Pedro Sánchez.

El mejor sistema de reparto es el que crea las condiciones para que la cuota de solidaridad, las diferencias económicas y de desarrollo entre territorios se reduzcan. ¿Es esto posible bajo este régimen?

Es evidente que la exigencia de financiación de los servicios públicos afecta a todas las autonomías... el Estado de las autonomías ha fracasado en ello.

Víctor Pozo

Incendios en Cataluña: un desastre anunciado



Los incendios en este inicio del verano en Cataluña son solo un aviso del peligro que nos acecha. Las causas son múltiples: el evidente calentamiento, el aumento de la masa forestal y, particularmente, la falta de mantenimiento de los bosques. No es exclusivo de Cataluña, aunque aquí se ha agravado en particular por la desaparición de la agricultura de montaña. Los criterios de productividad de la agroindustria de exportación dictada por la Política Agrícola Común de la Unión Europea han dejado en barbecho prácticamente toda la agricultura

de montaña. A esto se suma que los efectivos del cuerpo de bomberos, a pesar de su evidente profesionalidad, no han aumentado (produciéndose incluso la muerte de uno de los agentes). En el caso del incendio del Baix Ebre fue necesaria la intervención de la UME (Unidad Militar de Emergencia).

En Lleida casi 6.000 hectáreas de una zona cerealera ardieron en un incendio llamado de «nueva generación», que mostró la inadecuación del servicio de bomberos.

En el Baix Ebre el incendio que afectó a más de 3.300 hectáreas de montaña señaló en particular la absoluta desatención de las zonas boscosas. Este año su masa forestal ha aumentado casi el 20% en relación, por ejemplo, a 1993, cuando hubo un incendio de las mismas características, pero se encontró con la zona de montaña cultivada, que ejercía el papel de cortafuegos.

El abandono de la actividad agrícola

Según Juan Rovira Morato, jefe de los Servicios de Intervención del Baix Ebre «el abandono de la actividad agrícola es el prin-

cipal hándicap que tenemos en el bosque, que no deja de producir biomasa. Ahora hay mucho más combustible que antes». «Sin agricultura y ganadería perdemos la gestión del territorio»

A nivel de todo el Estado un estudio rápido dice lo siguiente: Un aumento considerable de la masa forestal (con el desaprovechamiento de la biomasa producida. Al parecer solo se explota el 15% de ella cuando se importa petróleo y gas a mansalva); un tercio de esta masa está abandonada, o sea, es un polvorín; otro tercio solo parcialmente y el otro tercio está cuidada. Lo cual nos lleva a otro problema: el 70% de la superficie forestal es de propiedad privada, que en su mayor parte está en el abandono. Es evidente que sin una intervención de los poderes públicos es imposible solucionar el problema, agravado por las temperaturas. El problema solo puede solucionarse poniendo bajo el control de las instituciones del Estado el cuidado del medio forestal.

A.Tubau. 17 de julio

IMPEDIR QUE HAYA NUEVOS TORRE PACHECOS

Manifiesto de “*Información Obrera*” ante los hechos ocurridos en la población de Torre Pacheco (Murcia)

Estos días, 15, 16 y 17, por las redes sociales, se convoca abiertamente a la organización de un pogromo contra los trabajadores de origen emigrante del pueblo murciano de Torre Pacheco: Los mensajes invitan a “cacerías” contra “los moros”, “las anchoas”, como son calificados despectivamente.

El mismo alcalde del PP, Pedro Ángel Roca, se ha visto obligado a pedir a las fuerzas de seguridad del Estado que detengan la llegada de grupos de fuera organizados por la extrema derecha. Hasta ese momento, los más de 100 efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional se habían contentado con rodear el barrio de San Antonio, mayoritariamente habitado por trabajadores de origen marroquí.

El pretexto para este pogromo ha sido la agresión sufrida el miércoles 9 de julio por una persona mayor, llevada a cabo por tres jóvenes “presuntamente” de origen marroquí. El alcalde de Torre Pacheco convocó el jueves a una concentración de repulsa que se convirtió en una algarada contra los habitantes del barrio de San Antonio.

Posteriormente, el viernes y el fin de semana, grupos venidos de fuera entraron en el pueblo armados de palos y bates de béisbol y, con toda impunidad, sembraron el terror en el barrio, incluso incendiando comercios y destrozando coches.

El gobierno, por boca de su ministro del Interior, señor Marlaska, acusó a la extrema derecha y confirmó la presencia de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden, llamando a impedir que se recibieran grupos extraños al pueblo.

Vox añadió leña al fuego, denunciando la política de emigración y reafirmando la necesidad de expulsar a 8 millones de emigrantes. El PP condenó las agresiones sin desmentir a Vox, mientras que el PSOE, SUMAR y PODEMOS presentaron denuncia contra los grupos de extrema derecha.

LAS CAUSAS SOCIALES DE ESTA SITUACIÓN

Torre Pacheco, ciudad de 41.000 habitantes, está en el corazón del Campo de Cartagena, una comarca de extrema fertilidad y convertida desde inicios de los 90 en una región agroexportadora de frutas y legumbres al calor de la PAC.

La transformación agrícola de la región llevó a la necesidad de importar mano de obra, la mayoría de origen marroquí.

A los primeros emigrantes, hoy españoles,

se suman hoy los hijos de estos trabajadores, que aseguran las labores duras del campo.

Casi un tercio de la población de Torre Pacheco es de origen marroquí.

En los años 90, con su llegada de emigrantes, se constituyó la Mancomunidad de Servicios Sociales, para asegurar a los jornaleros agrícolas viviendas, salud, educación, es decir, los servicios públicos necesarios para permitir la integración de esta población, sobre la base de garantizar todos los derechos sociales y democráticos que son la base de la convivencia.

En 2010, con la política de recortes, la Mancomunidad fue disuelta, y los nuevos gobiernos municipales dieron la espalda a la población trabajadora. Desde entonces, el barrio de San Antonio no ha dejado de degradarse.

Pero la explotación agroindustrial sigue nutriéndose de trabajos precarios, trabajo duro, mal pagado (incluso algunos, en negro).

Los hijos, nacidos en España y ya españoles, no aceptan resignarse a lo que sufrieron sus padres; exigen las mismas oportunidades que todos los ciudadanos del país.

Pero la rentabilidad de las grandes explotaciones agrícolas necesita una mano de obra barata y sin derechos.

EL RACISMO ES UNA NECESIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA

El capital, el Estado, el régimen monárquico al servicio de la explotación necesitan inocular o alimentar el germen del racismo.

Dividir a los trabajadores, para que la mano de obra agrícola acepte condiciones de extrema explotación. Introducir una cuña entre el sector más explotado de la clase trabajadora y el resto de la misma.

La destrucción de la protección social, acentuada ahora por la política de guerra, de rearme, de aumento de gastos militares, no hace más que amplificar esta guerra social.

Supone la degradación de barrios como San Antonio, impidiendo la integración social. Al mismo tiempo, las políticas de precarización, de bajadas del salario, de especulación de la vivienda, aplicadas por todos los gobiernos, ya sean de “derechas” o de “izquierdas”, que llevan a una parte importante de la juventud a rechazar un sistema que les deja sin futuro, alimentan a la extrema derecha.

El editorial de La Vanguardia del 14 de julio

decía “Habrá más Torre Pachecos”. Días antes, una mezquita aún por estrenar fue incendiada en Piera (Catalunya) y hace un mes y medio un centro de menores de esta localidad fue atacado. La alcaldesa de Ripoll se niega, de hecho, a empadronar a los emigrantes.

La nueva presidenta de la Unión Europea, la “socialdemócrata” danesa Mette Frederiksen, expuso en el Parlamento Europeo su programa, basado en la lucha contra la inmigración. Un discurso que fue ampliamente aplaudido por toda la ultraderecha. Preside un gobierno que propone atrasar la jubilación a los 71 años y que ha eliminado un festivo para sufragar el gasto militar.

El gobierno francés presenta un proyecto de presupuestos que propone congelar las pensiones, eliminar dos festivos, recortar el gasto social y sanitario, mientras duplica el presupuesto militar. Son medidas de guerra social que, para aplicarse, necesitan dividir y enfrentar a la población trabajadora.

Entretanto, la ILP que permitirá legalizar la situación de al menos 500.000 migrantes, presentada en el Congreso en marzo de 2024, tiene su tramitación paralizada en el Congreso. Se sustituye, por el momento, por un decreto ley que facilita teóricamente la regularización, pero que tiene grandes dificultades para aplicarse.

En esta situación, el aumento de los gastos militares es un golpe brutal a toda política de cohesión social.

El peligro de división de la clase obrera es inmenso. No basta con lamentarse, con alarmar sobre el crecimiento de la extrema derecha, con denunciar su demagogia. Los trabajadores necesitan que sus organizaciones, y, en particular, los sindicatos, se pongan a la cabeza no solo de la regularización, de la libertad de circulación, sino del restablecimiento de los servicios públicos necesarios para todos, de origen nativo o extranjero, para asegurar la convivencia. Y que organicen la movilización unida para conseguirlo.

Luchar contra la persecución a los emigrantes exige luchar por los derechos para todos, por recuperar y ampliar la protección social, contra los gastos militares. Esta es la única vía que puede detener a la reacción y a la extrema derecha.

*Comité de redacción de
Información Obrera. Julio 2025*

Desde Cádiz hasta Gijón

Dos acontecimientos van unidos en estos días en España, la entrada en prisión de los militantes obreros conocidos como las seis de la Suiza (Gijón) y las detenciones de trabajadores (van más de 30) en la operación policial «Fuego» como consecuencia de la huelga de las subcontratas de Astilleros de Cádiz, estando alguno de ellos en prisión provisional.

Lo primero que sorprende en esta situación es el tratamiento diferenciado por parte de las organizaciones que se reclaman del movimiento obrero. En el caso de Gijón, hay múltiples pronunciamientos de solidaridad; en el caso de Cádiz, parece que cuesta más trabajo ponerse del lado de los detenidos gaditanos.



A la muerte de Franco

Se estableció un régimen, que legalizando alguna de las conquistas ya conseguidas por el movimiento obrero: libertad sindical, de reunión... permitió que las instituciones del Estado franquista pervivieran en esta nueva situación. Entre otras, el poder judicial. En el transcurso de los años, el Estado necesitó nuevas leyes para seguir imponiendo el sistema de represión contra los trabajadores en lucha por sus reivindicaciones. Recordemos la ley conocida como «la patada en la puerta» expresión coloquial con la que se denominó a la antigua Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y que

permitía la entrada de la Policía en los domicilios particulares sin autorización judicial, que fue derogada en 2015 y sustituida por la Ley Orgánica 4/2015, conocida como Ley Mordaza. La primera de estas leyes, la de 1992, fue promovida por uno de los Gobiernos socialistas de Felipe González. La más reciente, la de 2015, por el PP con el voto en contra del PSOE. Cuando este partido accedió al gobierno prometió derogarla, pero aún sigue siendo solo una promesa.

Decíamos que sorprende el tratamiento diferenciado. El primero, Gijón, un conflicto de los trabajadores de una pequeña empresa de hostelería; el segundo, Cádiz, una lucha que

tiene que ver con la creación de un sector muy combativo que nace como consecuencia de la reconversión inconclusa de los astilleros gaditanos. Cádiz no es Sagunto, donde cerrado Altos Hornos del Mediterráneo desapareció el sector. En Cádiz de alguna manera no se pudo hacer la reconversión de los astilleros en toda su dimensión y hubo que cambiar el sistema de contratación y producción en la Bahía. Seguían entrando barcos a revisar y construir pero no de forma estable y continuada, lo que hizo que a las grandes empresas del sector no les interesara el negocio, dejándolo en manos de subcontratas temporales, en las que la explotación está más presente y es más acuciante que en la grandes empresas del metal.

Síntesis de las cosas

No es tan difícil entender que en el caso de Gijón todos estén de acuerdo en solidarizarse, mientras en Cádiz algunos dicen que es un tema del que mejor no hablar. En definitiva, es difícil ponerse en contra, pero mejor correr un tupido velo. Nadie tiraría piedras en su tejado.



Son las leyes y normas que, sumadas a la precedencia de los magistrados, herederos del régimen anterior, nos permiten entender que dos acontecimientos separados por más de 1.100 km y de categoría distinta, aunque con un mismo hilo conductor, la represión de los trabajadores, no se les esté dando el mismo tratamiento.

El Partido Socialista en su programa electoral se comprometió con la derogación de la Ley Mordaza. Hoy tiene una oportunidad de oro para salir de esa encerrona en la que se encuentra con los casos de corrupción y conseguir que los trabajadores recuperen la confianza perdida con la derogación de una ley que los reprime y los mete en la cárcel.

Las dos confederaciones sindicales tienen una responsabilidad inexcusable, igual que se hizo con la derogación del 315.3 del Código Penal, poniéndose al frente de la defensa de los trabajadores y luchando por la derogación de la Ley Mordaza.

¡Última hora!

Concedido el 3º grado a los 6 de la Suiza, desde este periódico pedimos su libertad y la consiguiente derogación de la ley Mordaza

P. Gallego, Carmona 16 de Julio 2025

Moreno Bonilla: la sanidad pública y universal

Según el presidente de la Junta de Andalucía la sanidad pública y universal es «inviable», mientras la desmantela en Andalucía

En declaraciones a La Vanguardia, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, ha dicho que «Los servicios sanitarios están diseñados para una población más joven. La sanidad pública para todo y para todos con una población cada vez más mayor puede llegar a un momento que sea inviable». Y propone «un gran pacto de Estado, especialmente entre los dos grandes partidos, sobre el futuro de la sanidad pública».

Pocos días antes, su consejera de Sanidad, Rocío Hernández, declaraba que «mi obligación es que aquella persona que no pueda o no quiera costearse un seguro privado sepa que cuenta con su sistema sanitario público». Es decir, una especie de beneficiencia para los sectores más pobres de

la clase trabajadora. Entretanto, el gobierno de Moreno Bonilla va engordando con sus conciertos la sanidad privada para que pueda hacer las inversiones necesarias, a costa del presupuesto público.

Ya conocemos el método de declarar a un servicio público «insostenible» o «inviable». Se trata de atemorizar a la población para que recurra al servicio privado alternativo y, a la vez, de adormecer toda resistencia ante lo «inevitable». Desde hace años, asistimos a esa maniobra en relación al sistema público de pensiones. Una falsedad frente a la cual el movimiento pensionista ha levantado la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social.

Ahora, Moreno Bonilla la lleva a la sanidad. El

«pacto de Estado» que propone no es sino un consenso de los principales partidos para organizar el desmantelamiento de lo que queda de la sanidad pública tras los graves recortes que viene sufriendo desde 2010 (recortes que ya vienen aplicando los gobiernos autonómicos de todo signo).

La sanidad pública y universal es una de las principales conquistas de la clase trabajadora. Supone la única garantía de un derecho efectivo a la salud. El pacto que necesitamos es la unidad de partidos, sindicatos y plataformas para luchar contra los recortes e imponer a los gobiernos presupuestos suficientes.

¡Gobierno quien gobierne, la sanidad se defiende!

Luis González

Peruanos se manifiestan en Barcelona

Convocados por «Peruanos Autoconvocados», más de un centenar de peruanos y peruanas se manifestaron por las calles de Barcelona el pasado día 19 de julio, acompañados de representantes de Madrid, Suiza, Italia.

La manifestación finalizó con las intervenciones de diversos compañeros y compañeras en la plaza de Sant Jaume, ante las puertas de la Generalitat de Catalunya.

La manifestación que transcurreó sin incidente alguno fue convocada el 19 de julio en conmemoración de la huelga general de 1977, que supondría el inicio de la dictadura de Francisco Morales.

Siguen manteniendo el pulso los «Peruanos Autoconvocados», que se manifiestan desde enero de 2023 cada domingo en la Rambla junto a la fuente de Canaletas, exigiendo la libertad de Pedro Castillo, recordando a los más de 80 muertos y la exigencia de una asamblea constituyente que dé fin al Gobierno usurpado por Dina Boluarte.



Concentración ante la Generalitat catalana

En las intervenciones también se recordó la situación de otros países latinoamericanos, así como la revolución española que dio su inicio en las calles de Barcelona el 19 de julio de 1936 frente al golpe fascista del Ejército sublevado encabezado por Franco.

Corresponsal

En memoria de Josep Calzada



El pasado 17 de julio y en el Centro Cívico de Sants de Barcelona se realizó un acto homenaje a Josep Calzada i Dolade, militante de la IV Internacional y de su sección en el Estado español (POSI), así como sindicalista de UGT.

Tras unas primeras palabras de recuerdo a su persona por parte de su compañera Teresa, tomó la palabra Jesús Béjar, camarada y amigo de la familia, venido desde Getafe (Madrid), recordando sus periodos compartidos y haciendo un llamamiento a los asistentes a seguir en el combate. «Permanente y constante en momentos políticos y personales muy difíciles, siempre

supo estar en el sitio adecuado». También quiso recordar a otros camaradas de Barcelona fallecidos como Mateo Siles y Miguel Fanlo.

Posteriormente, intervino el historiador y camarada Josep Antonio Pozo. Explicando los acontecimientos revolucionarios del 19 de julio de 1936, coincidiendo con su aniversario. «Los que niegan la revolución del 36 lo hacen para no tener que justificar su derrota».

Ángel Tubau, inició sus palabras con el poema de Bertolt Brecht «Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles», a través del cual caracterizaba la constante lucha de su camarada. Hizo un llamamiento a seguir su estela en el combate contra la guerra en la situación que atraviesa el mundo en su actualidad.

Cerró el acto su compañero de UGT, José Manuel Ocaña, evocando su actividad sindical y su fortaleza al afrontar temas complicados: «Nunca se dejó amedrentar y actuó en consecuencia».

Corresponsal

Insumisas Euskadi, en marcha

Finalizaba mayo y nos reuníamos en el barrio de Atxuri de Bilbao para poner en marcha el primer colectivo de Insumisas contra el rearme - Euskadi.

Posteriormente vendría una concentración en la plaza del Arriaga con lecturas por la paz incluidas, una nueva reunión el 9 de julio e incluso como conclusión un plan de actuaciones y de organización para unir fuerzas extendiéndose hasta otoño y más allá.

En Euskadi, como en tantos otros sitios no es que falten iniciativas y movilizaciones contra la guerra y muy especialmente contra el genocidio en Palestina, componente esencial de todos aquellos que impulsan la guerra como elemento de supervivencia del capitalismo. Pero también como en otros sitios actuamos dispersos, divididos, y esa es precisamente una de las inquietudes que los colaboradores de Insumisas contra el Rearme en Euskadi hemos mostrado y debatido, dando lugar al compromiso de unir fuerzas.

Quizás ese sea el impulso principal para que, colectivamente, en la reunión del 9 de julio decidiéramos apoyar el Manifiesto Europeo «Ni un euro, ni un arma, ni unáda humana para la guerra» e incluir en nuestro calendario el apoyo a la conferencia internacional y mitin convocados a principios de octubre en París.



Dejamos pendiente un debate que se incorporó a las reuniones: varios participantes se preguntaban ¿cuál es el papel de la ONU en la política de guerra?

También quedó pendiente la búsqueda de actividades para dar a conocer el colectivo y cómo financiar las actividades garantizando la independencia, pero sí acordamos que como mínimo nos reuniríamos a partir de septiembre los primeros miércoles de cada mes. Por supuesto, comenzamos el día 3 de septiembre.

Si estás interesado el mail del colectivo es: insumisascontraelrearme@euskadi@gmail.com

Mikel González (Bilbao)

Bétera

Reunión informativa de Insumisas contra el Rearme

El 10 de julio se presentó en Bétera (Valencia) Insumisas contra el Rearme. Asistieron cerca de 20 personas de distintas filiaciones sindicales y políticas.

Karin Jansen y Blas Ortega expusieron los objetivos y los motivos por los que constituir un colectivo contra la guerra y el rearme; María José Meseguer moderó el debate.

Al finalizar el acto, los asistentes dejaron sus señas y forma de contacto para constituir formalmente el colectivo en otra reunión posterior y se comprometieron a informar y adherir a otros compañeros y compañeras que no habían podido asistir al acto en esta ocasión.

Corresponsal

Al parecer... habemus devolución

Largo ha sido el parto y alumbramiento de la devolución del IRPF cobrado indebidamente durante decenas de años a los mutualistas de la Seguridad Social.

En la sesión del 21 de julio del Congreso de los Diputados, por fin, se ha aprobado la norma que permite la devolución.

Después de años de incertidumbre y de meses de calvario desde la fatídica decisión del 22 de diciembre de 2024, la ministra Montero (no confundamos con Montoro, que estos días ha sido imputado por corrupción y restar importancia a la causa que se está investigando, donde dos cúpulas de Hacienda de Gobiernos del PP están en la picota) decidiera anular la solicitud que habían presentado miles de mutualistas (régimen especial de la Seguridad Social extinto creado al inicio de los 70 del siglo pasado) para la devolución del cobro indebido del IRPF.

En principio estamos agradecidos por poder recuperar el dinero que el Estado nos quitó y era nuestro.

Pero somos muchos los pensionistas que nos preguntamos ¿era necesaria toda esta incertidumbre

en personas mayores? Posiblemente, la respuesta a esta pregunta nos dará la explicación a todos los sabores que ha padecido el colectivo. Unos pensarán, como decía el Gobierno, que la norma no permitía la devolución del dinero de una vez y hubo que utilizar un subterfugio, como es el proyecto de ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que incluye la disposición sobre los mutualistas. (nuestros lectores podrán observar la originalidad de la ley). Claro, en esta respuesta surge una duda ¿aquellos mutualistas que antes de diciembre de 2024 cobraron la totalidad en un solo pago ¿estaban fuera de ley? La respuesta a esta pregunta dará también la explicación de todo el desatino consistente.

Otros, mal pensados, responderían que era una cantidad de dinero suficiente, se calcula en 5.000 millones de euros, que, entre muertes e intereses generados en todo este tiempo, algo ayuda a la recaudación necesaria de este Gobierno en su «no al 5% pero sí al 2%» en los presupuestos de defensa de tanto enemigo como se ha buscado.

J.G. Carmona, 22 de julio de 2025

Sindicalistas por la auditoría

El pasado día 10 de julio se reunió la plataforma de “Sindicalistas por la Auditoría”. Convocada de forma urgente ante la preocupación generada por la actividad realizada por todos los gobiernos de Europa acelerando el rearme.

Sin duda, esta política económica de aumentar el gasto militar va a afectar a los servicios públicos y, en particular, a las pensiones.

En la reunión se hizo una puesta a punto de lo realizado y las tareas a realizar, recordando el motivo de su constitución.

Hace cuatro años fue aprobada la ley 21/2021 gracias a la movilización de los pensionistas, a través de la cual se actualizan cada año con la media del IPC.

Esto, por ejemplo, supuso que el año de mayor inflación, en 2023, la subida de las pensiones fue del 8,5%. En la misma ley se obliga al Estado a realizar una auditoría de la seguridad social, que debería haberse realizado durante los primeros seis meses desde su aplicación.

Habiendo pasado ya casi 4 años, no solo no se ha realizado, sino que la presión para acabar con el sistema de pensiones, afirmando que es insostenible (la auditoría demostraría su sostenibilidad), ejercida por bancos, ase-

guradoras, patronales y el propio gobierno (ver acuerdo PSOE y el PNV ya acordaron), pretende golpear y romper la caja de la seguridad social, de las pensiones.

Ahora además nos enfrentamos con la de nuestros gobiernos, las instituciones internacionales y el gobierno de EEUU, dirigido por Donald Trump, para aumentar los gastos militares. Ello requiere recortar partidas sociales y de servicios públicos. En España, la revalorización de las pensiones con el IPC, incluida en la ley 21/2021, es una conquista de las movilizaciones de los pensionistas, y está en peligro. Gobiérne quien gobierne.

En la citada ley también se consiguió introducir el compromiso del Gobierno para hacer una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Según el Tribunal de Cuentas, en los últimos 50 años los diferentes gobiernos han destinado más de 100.000 millones de euros de cotizaciones sociales a gastos impropios al pago de pensiones.

Según un informe sindical, de hecho son 519.000 millones. El gobierno de Sánchez sigue sin hacer la auditoría. Si se hiciera, el dinero debería devolverse, se demostraría la sostenibilidad del sistema público de pensiones y se podría reclamar la reversión de anteriores recor-

tes como el aumento de la edad de jubilación a los 67 años.

Esto reclamamos desde “Sindicalistas por la Auditoría” para exigir al Gobierno que cumpla la ley, haga ya la auditoría de cuentas, y entre otros acuerdos está el de pedir una entrevista con la ministra de Inclusión Social y Seguridad Social, Elma Saiz, así como seguir extendiendo en centros de trabajo y en más territorios la recogida de apoyos, firmas y la realización de actos de presentación de la campaña donde sea posible, para exigir al Gobierno la realización de la auditoría de cuentas de la Seguridad Social y el cumplimiento de la ley 21/2021.

Corresponsal



La reforma judicial mexicana



La reforma judicial en México dio sus primeros pasos en febrero de 2024, bajo el mandato del presidente Obrador, y debe culminar a principios de septiembre de 2025, bajo el mandato de la actual presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. La reforma se plantea como objetivo el de combatir la corrupción, acercar el sistema judicial a la población y acelerar los procesos judiciales, es decir, aumentar la credibilidad y legitimidad del Poder Judicial.

Posiblemente la reforma del sistema judicial más ambiciosa y cercana a la clase trabajadora, que sitúa al Poder Judicial en manos de sus votantes de forma directa. Muy alejada de otras reformas, como la que encabeza el ministro Bolaños en España, o incluso la boliviana, que estaba acotada a ciertos estamentos.

En un país donde los medios de comunicación y la judicatura se encontraban presos de otros poderes ajenos a los intereses ciudadanos, como los del narcotráfico y los derivados aún de la política del PRI, que convirtieron al Poder Judicial y al propio aparato policial en sus verdaderos aliados. Con 359 votos a favor y 135 en contra, se abrió la puerta a una de las mayores reformas judiciales conocidas. Así pues, a partir de 2025, los magistrados y jueces del sistema federal (casi 2.000) serían elegidos por el voto popular en unas elecciones.

Ello comportará otras modificaciones, como la reducción del número de jueces en estamentos como la Corte Suprema y el Tribunal Electoral, la reducción de sus tiempos de mandato, la eliminación de la pensión vitalicia de los ministros de la Corte y una revisión salarial (no podrán cobrar más que el propio presidente).

La reforma también comporta modificaciones como la creación de un ente disciplinario para el Poder Judicial, entre otras. Aunque sigue siendo limitada, puesto que solo afecta al Poder Judicial Federal y no a los sistemas locales o fiscalías, que comportan el 80% de los procesos judiciales, ambos pendientes de otra reforma. Precisamente por ser donde se concentran los casos de corrupción en la propia justicia.

Los contrarios a la reforma

Las bases más conservadoras alegan que tal medida, es decir, la elección popular de los jueces y magistrados, «politizará la justicia» y que ya no dependerá de «sus conocimientos» y «sus méritos». También

se oponen por entender que el crimen organizado pueda financiar candidaturas. A lo que contestan sus partidarios: «Ahora no las financian, los compran o extorsionan directamente».

Las injerencias

La intromisión en la política de México por parte de EE.UU, a través de su embajada advertía que la propuesta era un riesgo mayor para la democracia, ya que podía amenazar el acuerdo comercial entre los tres países que conforman el T-MEC, y que debe ser revisado durante el 2026. No sospechaban, o sí, la política arancelaria que impondría Trump.

También, cómo no, manifestaba su total oposición a la Relatoría de las Naciones Unidas: «significa acabar con la independencia judicial». Manifestación a la que se sumaba la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «socava la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas», y cómo no, los inversores, porque temían que fuera utilizado por el Gobierno para sacar adelante leyes que pueden perjudicar al sector empresarial y restar seguridad a las inversiones.

Pero la firme determinación del ya expresidente Obrador como la de la presidenta actual Claudia Sheinbaum mantuvieron las promesas realizadas: evitar que «los tribunales se transformaran en una trinchera de la oposición al servicio de los poderosos». No podemos obviar la oposición judicial con la que se encontraron las propuestas políticas que pretendían la mayoría elegida; en particular, la que pretendía ampliar la participación del Estado en el sector energético era cuestionada.

A pesar de su oposición estamental, la votación fue llevada a cabo el pasado 1 de junio, donde fueron escogidos 881 cargos judiciales y entre ellos los nueve ministros que conformarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pendientes de la finalización del periodo de posibles impugnaciones, el 1 de septiembre tomarán posesión de sus cargos.

Debiendo afrontarlo con la oposición de aún una parte significativa de la judicatura, la de los medios de comunicación contrarios y, sobre todo, bajo la sospecha inducida de no estar preparados y que no se trata de un experimento. Además, sobre ellos recaerá un cúmulo de procesos pendientes: más de un millón de casos. A examen su transparencia y eficacia.

Otros países

Las elecciones populares de jueces no son una novedad, aunque de muy reducida aplicación; solo son una realidad en cientos de estados de EE. UU. (como Carolina del Norte, Alabama, Pensilvania), en Suiza en algunos cantones, pero no pueden estar afiliados a partidos políticos, y en Bolivia desde 2011, no sin dificultades y reformas posteriores y acotado a ciertos órganos judiciales para elegir a los 28 integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Eva Clara

La ley Bolaños

España arrastra un poder judicial totalmente vinculado al régimen monárquico de los Borbones (salvo el periodo de la II República), al cual se le añadió el propio de una dictadura, la surgida de la sublevación encabezada por Franco.

Tras su muerte, siguió vigente la monarquía borbónica, y apenas se han realizado reformas sustantivas del poder judicial y la CE consagró el sistema judicial muy lejos de la imparcialidad y objetividad propia que se le exige a quien tiene como única función la de interpretar la ley. Con el gobierno de Pedro Sánchez, se pretende iniciar una serie de reformas, fundamentalmente dirigidas a su agilización y una supuesta democratización de la carrera judicial, sin realizar el punto final necesario e imprescindible.

Recientemente, los mismos jueces organizaron una huelga (que tienen prohibido) y señalan sin pudor con carteles en sus protestas al propio presidente del Gobierno como corrupto, ¡pidiendo su dimisión y elecciones ya!, en un claro ejercicio de independencia, despolitización y objetividad.

Algunos apuntes sobre la Ley Bolaños

Transformaría los juzgados unipersonales (3.900) en tribunales de instancia (431). Es decir que varios jueces trabajarán de manera conjunta para tomar decisiones más equilibradas, reduciendo la carga de trabajo individual y agilizando los procesos judiciales. También contribuiría a la unificación de criterios, evitando resoluciones contradictorias.

Se crearían oficinas de justicia en los municipios que reemplazarían a los juzgados de paz, pudiendo realizarse en ellos trámites judiciales sin tener que desplazarse. Ahorraría tiempo y recursos. Se impulsaría la mediación y el arbitraje buscando acuerdos entre las partes y evitando la judicialización y descongestionando los tribunales.

Abre la puerta a las acciones colectivas donde las organizaciones de consumidores, al actuar en representación de grupos de personas, podrían disuadir a grandes empresas de llegar al juzgado.

Incluye una modernización y digitalización del sistema judicial. Todo ello sin presupuesto económico para ampliar la plantilla en los juzgados. Pero la reforma que más oposición genera entre los jueces, sin duda, será la que se pretende aprobar después de vacaciones, la que afectará a la carrera judicial. De la cual informaremos ampliamente en el próximo número.

Miguel González

La militarización de Rumanía y su impacto en los trabajadores: entre inversiones militares y austeridad

Publicamos extractos de la contribución en *Informations ouvrières* de Andrei Rares



Base militar de la Otan en Rumanía

La Unión Europea ha anunciado un ambicioso plan para asignar hasta 800.000 millones de euros al reforzamiento de sus capacidades militares en los próximos cuatro años. [...] Para hacer posible ese gasto, la UE activa la cláusula del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite a los Estados miembros superar sus límites presupuestarios habituales.

Sin embargo, Rumanía no cuenta con esas excepciones presupuestarias, lo que significa que debe encontrar recursos por otros medios. Las medidas anunciadas atentan directamente contra las conquistas históricas de la clase obrera, en un contexto en el que los gastos militares rumanos alcanzarán un nivel récord de alrededor de 8.700 millones de dólares, siendo de 5.600 millones de dólares en 2023, es decir, más del 3% del PIB, un nivel superior al objetivo de la OTAN y entre los más elevados de la región. Según la cumbre de la OTAN de La Haya, los administradores de fondos rumanos prevén que el presupuesto de defensa llegue al 3,5% del PIB de aquí a 2030 y al 5% de aquí a 2035, gracias a inversiones de gran calado en la modernización militar y a la adquisición de tecnologías punta.

Consecuencias sociales para Rumanía

Rumanía afronta una tasa de paro juvenil de alrededor del 30%, una cifra alarmante que atestigua las tremendas dificultades para integrar a los jóvenes en el mercado laboral. En este contexto, promover el Ejército como una opción de carrera estable y bien equipada, especialmente mediante campañas publicitarias en los festivales de música y en las empresas públicas, puede ser percibido como una solución parcial y limitada. Así, la militarización de la sociedad puede con-

vertirse en un medio para gestionar el paro sin crear empleos útiles para la sociedad, sino destruyéndola. Además, la austeridad impuesta para financiar el sector de la defensa puede agravar los problemas sociales, reduciendo las inversiones en educación, sanidad y otros servicios públicos esenciales.

El último sondeo revela que el partido AUR (Alianza por la Unificación de los Rumanos) goza de una popularidad del 40% entre los electores. La campaña del candidato independiente al que sostiene AUR se ha basado principalmente en el rechazo de la militarización, reflejando el punto de vista de una amplia franja de la sociedad contra la guerra. Está claro que la política pro-guerra y militarista la impone la clase capitalista a la clase obrera, y cualquiera que sea la posición de los representantes de la burguesía, esa política no va a cambiar [...]. Los preparativos en tal sentido se manifiestan sobre todo en las discusiones relativas a la construcción de la mayor base de la OTAN en Europa en territorio rumano y la posibilidad de reintroducir el servicio militar obligatorio, eliminado desde 2007.

Acciones del Gobierno y reacción de los trabajadores

A comienzos de 2025, el Gobierno impuso medidas de austeridad que afectaron a sectores como la energía y los transportes, provocando manifestaciones sindicales e inter-sindicales.

En el sector energético, se congelaron los salarios con un descenso de 1.500 lei, en violación de los convenios colectivos. En METROREX, la falta de mano de obra obligó a los mecánicos a hacer horas extra, poniendo en peligro la seguridad de los pasa-

jeros. El 24 de enero, se organizó una manifestación intersindical contra la austeridad, en la que participaron forestales, siderúrgicos, empleados de Metro y trabajadores del sector nuclear. Paralelamente, el Gobierno firmó importantes contratos de equipamiento militar:

1.059 vehículos blindados ligeros COBRA II 4x4, por valor de 857 millones de euros (aparte del TVA).

400 bombas guiadas GBU-39B SDB-I y tres sistemas V-BAT, cuyo valor puede alcanzar los 84 millones de dólares.

Contrato para el sistema de armas individuales de tipo OTAN, por valor de 440 millones de euros (aparte del TVA).

Actualmente, invocando el déficit presupuestario, el nuevo Gobierno nombrado por el presidente Nicușor Dan ha impuesto un nuevo plan de austeridad que afecta a la clase obrera.



Ejército terrestre de Rumanía

Conclusiones

El militarismo es un componente intrínseco del capitalismo, un método de gestión de los recursos y de la mano de obra y de creación de nuevos mercados. En este contexto, la «amenaza» exterior sirve como herramienta de propaganda para garantizar la aceptación pública de unos presupuestos militares colosales que, lejos de aportar seguridad, aumentan el riesgo de conflicto [...]. Un mercado de armas no puede prosperar solo mediante la producción y el almacenamiento; precisa su utilización para justificar su existencia y dejar hueco a una nueva producción. Las acciones encaminadas a prevenir la guerra, preparándola, son las mismas que se convertirán en el principal factor que la desencadene.

Andrei Rares
*Firmante del llamamiento
Internacional contra la guerra*

El gran rearme

En los medios de comunicación aparecen de vez en cuando noticias sobre nuevos desarrollos del armamento, las bases, las unidades de combate o su intervención, en España o en otras partes. Si el Gobierno quisiese, los informativos estarían saturados de noticias militares. Pero el Gobierno y el Alto Estado Mayor quieren evitar que la población se alarme de lo que están haciendo con nuestro dinero.

Recojamos algunos recortes de prensa para esbozar el panorama del siniestro rearme. Hablan de aumentar el gasto en guerra un 5%, o según se mire un 3,5%. Son cantidades incommensurables que solo significan que cada Gobierno volcará una morterada en medios para la guerra, y cuando los fabricantes de armas USA pidan más compras, cada Gobierno tendrá que añadir más pedidos, sin límite.

El Gobierno ha comprometido como objetivo con la OTAN enrollar a 14.000 hombres y mujeres más de aquí a 1935 en las Fuerzas Armadas, que fueron creadas por los generales rebeldes en 1936 después de la disolución del Ejército por el Gobierno republicano y cuentan hoy con 120.000 miembros. Esto entra dentro del máximo legal establecido ya.

En 2023 España por primera vez ha importado más equipos y sistemas de armas (37.853 millones) que exportado, porque destinan más dinero del Estado y particulares a gastos parasitarios como los militares. Ha importado más sobre todo de Alemania y Francia, de los programas de producción conjuntos.

Importó el 5% de los Estados Unidos. Israel es el noveno suministrador de armas, pero el Gobierno acaba de suspender la importación de nuevos programas, manteniendo los existentes.

El Gobierno ha autorizado, en vísperas de la cumbre de la OTAN, aumentar en 1925 un mínimo de 7.000 millones los presupuestos ligados a Defensa, sin pasar por el Congreso. El jefe de la OTAN entiende que esto aumentará un 5% el gasto en Defensa; el Gobierno y los militares, que será el 2,1%. Lo pactado es que aumentará lo que haga falta.

Estamos en la onda de Trump, que ha dado prioridad total a los presupuestos de «defensa» y ha eliminado la USAID, la mayor agencia para el desarrollo mundial. Según la Agencia para el Desarrollo Global Trump, con su retirada de ayuda, ha provocado 3.828 muertes diarias por sida, 428 por malaria y 354 por tuberculosis, y 1.524 por fallecimientos por ausencia de ayuda humanitaria.

Los principales Estados europeos, que aportan el 25% de los planes de ayuda al desarrollo mundial, están recortando esa ayuda. La ONU prevé un recorte del 20%: «No estamos invirtiendo en una amenaza existente, como la crisis climática, pero sí en armas, que es un completo contrasentido». El caso de España es más claro que el agua.

Pasar de un 1,3 % del PIB en Defensa al 2% es invertir 10.500 millones más. Con ese dinero se podría cumplir el objetivo del 0,7%



en ayudas al desarrollo, mientras se está en un 0,25 de ayudas a otros países. Nunca ha llegado al 0,7%.

El FMI, que pretende vivir en un mundo de hadas, dice que el PIB de cada país debe crecer por arte de encantamiento un 50% para que los 80.000 millones gastados en guerra por España –en lugar de los 33.000 actuales– no suponga sacrificios en otras partidas. En lo discutido en la cumbre de la OTAN sobre el supuesto 5% de gasto en Defensa se juega la existencia de muchos Estados y a eso iban dirigidas las amenazas de Trump a Sánchez: no tolera que los Gobiernos defiendan las bases de subsistencia de cada país. Y tampoco tolera no controlar la política de cada país.

Manuel Cuso

El puerto de El Pireo se organiza contra la guerra

Extractos del artículo publicado en el nº. 868 de *Informations ouvrières*



En la noche del 16 de julio, cientos de estibadores, respondiendo al llamamiento del Centro Obrero del Pireo, sindicatos portuarios como Enepe y Penen, Pame, junto con militantes de organizaciones de izquierda, colectivos pro palestinos y el movimiento BDS, se reunieron en los muelles 2 y 3 de la terminal de Cosco, hoy propiedad china. Su objetivo: impedir que un nuevo cargamento militar llegara a Israel.

En un imponente escenario industrial, mi-

les de manifestantes se reunieron a partir de las 21:00 horas para responder a un llamamiento de los sindicatos portuarios, que declararon alto y claro: «Ni una mano para descargar el cargamento de la muerte».

[...] «Nos ensuciamos las manos con el trabajo, no con la sangre de los niños palestinos», declaró Markos Bekris, presidente de Enepe, entre los aplausos de los manifestantes.[...]

Desde noviembre de 2023, los sindicatos portuarios griegos han adoptado una posición firme, que consiste en rechazar cualquier cargamento vinculado a las guerras en Palestina, Ucrania o Siria. Esta orientación se adoptó en una conferencia del Consejo Europeo de Estibadores (EDC), celebrado en El Pireo.

[...] Los estibadores griegos no están solos. Participan en una extensa red de solidaridad internacional que agrupa sindicatos de Barcelona, Malta, Eslovenia, Italia (USB), Francia (CGT) y Turquía. Movimientos como BDS o la campaña *No Harbour for Genocide* proporcionan información y apoyo logístico

para identificar las cargas sospechosas y organizar bloqueos coordinados. Los datos sobre los cargamentos se verifican y se cruzan con las declaraciones marítimas oficiales para garantizar acciones eficaces contra el aprovisionamiento de la maquinaria bélica israelí.

[...] Mientras que la guerra colonial que libra Israel contra Gaza sigue provocando miles de muertes, los estibadores de El Pireo encarnan un frente obrero internacionalista. Negándose a cargar el acero, las balas y las bombas, demuestran que la oposición a la guerra no se limita a las palabras, sino que se trata de realizar actos concretos, valientes y organizados.[...]

Los estibadores os lo dicen claramente:

¡No se manchan las manos con la sangre de los pueblos!

Nuestro Gobierno –proisionista– ha de entenderlo bien:

¡Palestina será liberada, Israel será aislado!

Exigimos la ruptura total de cualquier relación (militar, comercial, diplomática) con el Estado asesino que es Israel.

Por un futuro común basado en la justicia

Intervención del militante palestino Awad Abdelfattah en el congreso judío antisionista de Viena (13-15 de junio de 2025)



Combatientes por la libertad, es un gran honor para mí dirigirme a esta histórica asamblea. El primer congreso antisionista en Viena. Vuestra valentía al organizar este evento envía un mensaje contundente.

El sionismo no habla en nombre de todos los judíos. Y la justicia en Palestina no es solo una causa palestina. Es un imperativo mundial.

Este congreso recuerda al mundo un pasado diferente. Un pasado en el que judíos, cristianos y musulmanes convivían en el mundo árabe e islámico, en relativa armonía, mucho antes de que el sionismo rompiera esa coexistencia. En ciudades como Bagdad, Alepo, Fez y, por supuesto, Jerusalén y Jaffa, comunidades diversas compartían barrios, lenguas, mercados y luchas cotidianas.

Palestina también fue en otro tiempo una tierra donde judíos y palestinos convivían como vecinos, y no como conquistadores. Nos fijamos en este pasado no por nostalgia, sino con lucidez y determinación. Sabemos que otro futuro es posible porque ya ha existido.

¿Siguiendo siendo posible un futuro común?

Un futuro sin apartheid, sin muros, sin supremacía. ¿Podemos seguir imaginando un solo Estado? Permitidme comenzar respondiendo a una pregunta que muchos se plantean hoy en día. ¿Es aún posible un futuro común teniendo en cuenta los horrores cometidos en Gaza, la anexión de facto de Cisjordania y las políticas sistemáticas de discriminación y opresión contra los palestinos dentro de Israel, por no hablar de las guerras interminables contra los países árabes y musulmanes vecinos?

Para los habitantes de Gaza, bombardeados, hambrientos, quemados vivos, la idea misma de vivir en un solo Estado con quienes los exterminan parece absurda, incluso insultante.

¿Cómo se puede hablar de coexistencia cuando hay niños enterrados bajo los es-

combros y el mundo mira en silencio? Pero ni siquiera el genocidio puede borrar nuestra existencia. Seguimos aquí. Y un día, los israelíes se despertarán a una nueva realidad, la de un pueblo aislado, moral y políticamente arruinado, y la de una potencia militar incapaz de aportar legitimidad ni paz.

Por lo tanto, podemos preguntarnos de nuevo: ¿qué vendrá después? La respuesta no puede ser los bantustanes. No puede ser una vida bajo asedio. No puede ser un exilio sin fin.

La campaña One Democratic State.

La única respuesta justa es el desmantelamiento del régimen sionista y la creación de un único Estado democrático en toda Palestina, donde todos, independientemente de su religión u origen, vivan como iguales bajo una sola ley, con una sola voz, en una patria común. Desde 2018, formo parte de



Judíos ortodoxos participan en una protesta contra la expansión de los asentamientos

la campaña One Democratic State o ODSC, un movimiento palestino que aboga por un Estado descolonizado, laico y democrático desde el río hasta el mar.

Entre los miembros fundadores de esta campaña se encuentran valientes judíos anticolonialistas, como Ilan Pappé y Haïm Bresheeth, que impulsan con otros esta conferencia, así como Jeff Halper y otros. También contamos con Ghada Karmi, que también forma parte del equipo organizador de la campaña. Esta visión no es un concepto occidental. No es un sueño para después de la paz.

Es la continuación de nuestra larga lucha por la liberación nacional y la justicia. ODSC no es un eslogan. Es un programa político basado en la igualdad, la justicia y el derecho al retorno.

Una perspectiva que gana terreno, especialmente entre los jóvenes.

Ofrece una alternativa clara a las falsas soluciones que se nos han propuesto. Oslo, la paz económica de los bantustanes, no son soluciones.

Son anestésicos, píldoras edulcoradas para aliviar el dolor de la colonización. Por el contrario, el Estado democrático único es la única visión seria y coherente que aborda las raíces del conflicto, el colonialismo de asentamiento, la limpieza étnica y la estructura racista del régimen israelí. A pesar de los obstáculos, asistimos a una creciente evolución de la consciencia pública.

La idea de un Estado democrático único está ganando terreno, especialmente entre los jóvenes palestinos, los movimientos de solidaridad mundial y, cada vez más, entre algunos segmentos de las comunidades judías de todo el mundo.

Sin embargo, nuestro mayor desafío sigue siendo la falta de un movimiento popular amplio capaz de transformar esta visión en poder. Esa es nuestra tarea: organizar, educar y movilizar a todas las clases sociales, todas las regiones y todas las generaciones, y eso es lo que estamos haciendo.

La suerte de los palestinos desde la Nakba de 1948

Sobre los palestinos dentro de Israel. Como ciudadano palestino de Israel y persona profundamente comprometida con la organización política desde que alcancé la edad adulta, permitidme ofreceros una visión general de nuestra realidad y de nuestro papel en esta lucha más amplia.

Viene de la página anterior

Somos los supervivientes de la limpieza étnica de 1948. Casi todas las familias tienen parientes en campos de refugiados, viviendo en condiciones espantosas desde la Nakba. Nosotros nos hemos quedado en nuestra tierra, pero bajo un régimen que nos trata como una amenaza demográfica, como ciudadanos de segunda clase, en un Estado basado en la supremacía judía y la exclusión. Nuestra tierra ha sido explotada, nuestra historia borrada, nuestra lengua marginada y nuestra presencia constantemente cuestionada, a pesar de que tenemos la ciudadanía israelí. Durante décadas, nuestra realidad ha sido ignorada, mientras que Israel era celebrado en Occidente como la única democracia de Oriente Medio, nosotros vivimos bajo un régimen militar desde 1948 hasta 1966, es decir, durante veinte años. El mundo nos ha tratado como si estuviéramos al margen del conflicto, porque se negaba a reconocer el fundamento colonial del proyecto sionista.

El rechazo de los acuerdos de Oslo

Los acuerdos de Oslo no hicieron más que reforzar este olvido. Nos excluyeron de la definición del pueblo palestino, tratándonos como si no tuviéramos ninguna importancia para la solución política.



Nuestra situación se consideraba accesorio, y no sistemática.

Pero nos negamos a desaparecer. Rechazamos Oslo, no solo porque nos excluía, sino también porque reforzaba el apartheid, fragmentaba a nuestro pueblo, legitimaba el sionismo y prolongaba nuestro sufrimiento. En 1995, lanzamos un movimiento político que cuestionaba toda la lógica de Oslo y la idea de un Estado basado en la supremacía étnica. Exigimos un Estado para todos sus ciu-

dadanos. Se trataba, por tanto, de un partido, llamado Balad en hebreo. Pero en árabe significa Asamblea Nacional Democrática.

Esta desconfianza, junto con una movilización popular sin precedentes, especialmente entre los jóvenes, sacudió al establishment israelí.

Reavivó los temores sionistas sobre una importante población palestina políticamente consciente dentro de las fronteras de Israel.

Los israelíes se preguntaban: ¿cómo es posible que, a pesar de todas las medidas represivas que hemos empleado contra estos palestinos en Israel, de repente se hayan rebelado y desafiado al Estado judío saliendo a la calle, hasta el punto de unirse a los levantamientos en Cisjordania y en la Franja de Gaza, de forma pacífica, ya que nunca hemos recurrido a medios militares?

La represión ejercida por el régimen genocida israelí se intensifica

Hemos luchado pacíficamente, legalmente y a nivel popular. En respuesta, Israel ha intensificado su represión mediante la vigilancia, las detenciones y confiscaciones, las demoliciones de viviendas, la incitación al odio y un alarmante aumen-

to del crimen organizado en los sectores palestinos. Una política que muchos consideran un genocidio progresivo, con más de 110 ciudadanos palestinos muertos en actos violentos solo este año.

Hoy, mientras Israel lleva a cabo una ofensiva genocida contra Gaza, la represión dentro del país se ha intensificado. La extrema derecha habla ahora abiertamente de pruebas de lealtad, expulsiones e ingeniería demográfica.

Nos enfrentamos a un futuro moldeado



por fuerzas fascistas que no nos consideran ciudadanos, sino enemigos internos.

Palestina, una causa mundial, una lucha universal

Y, sin embargo, resistimos. Porque sabemos que nuestro papel no es marginal, sino central. Somos el vínculo entre lo que Israel pretende ser y lo que realmente es. Somos la prueba viviente de que Israel no es una democracia, sino un sistema de apartheid y colonialismo de asentamiento, un sistema que ahora se ha revelado al mundo como un régimen genocida.

Palestina es una causa mundial. Hoy, la lucha palestina está en el centro de la lucha mundial por la justicia.

En todo el mundo, la gente se está levantando, estudiantes, trabajadores, artistas y judíos conscientes. Están vinculando la causa palestina con las luchas contra el racismo, el capitalismo, el patriarcado y el imperialismo. Porque la lucha por Palestina no es solo nacional, es universal.

Es nuestro deber moral unirnos a las personas conscientes de todo el mundo para construir un amplio frente mundial, basado en principios y decididamente anticolonial. Que este congreso sea el comienzo de ese frente. Que quede claro: el pueblo palestino no desaparecerá.

No nos rendiremos. Desde las ruinas de Gaza hasta las colinas de Galilea, desde los campos de refugiados hasta las ciudades de la diáspora, seguiremos luchando, no para vengarnos, sino para obtener justicia. No para destruir, sino para reconstruir.

Intervención del militante palestino Awad Abdelfattah en el congreso judío antisionista de Viena (13-15 de junio de 2025)

Publicado en Informations Ouvrières n.º 867

-Más de 200 firmantes en el estado español en los primeros días de campaña, electos, sindicalistas, profesionales...
-Para más información de la campaña Internacional y si deseas adherirte dirige a nuestra pagina Web

<https://informacionobrera.org/>

<https://informacionobrera.org/campanas/llamamiento-europeo/>

“Ni un céntimo ni un arma, ni una vida humana para la guerra”

Manifiesto Europeo inicial con los primeros firmantes

Los dirigentes europeos preparan la guerra. Está en marcha un vasto programa de armamento. Y a quien van a pedir que pague el precio de sus armas es a la clase obrera, a través de los impuestos, de los recortes en nuestras prestaciones sociales, del descenso de nuestro nivel de vida, con nuestro sudor y nuestra sangre.

El orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial se desintegra, política, financiera y militarmente. Nos enfrentamos a múltiples crisis que se están agravando: la del propio capitalismo, que pone en peligro el futuro de la humanidad; el inminente colapso ecológico, y el riesgo creciente de una guerra mundial, incluso de una guerra nuclear.

No son problemas nuevos, pero el segundo mandato de Trump y el ascenso de la extrema derecha en Europa los amplifica.

Por ello, militantes, sindicalistas y demócratas de toda Europa lanzan este llamamiento a unirse contra la guerra y contra los gastos militares, y a rechazar la exigencia de los Gobiernos europeos de apoyar sus políticas brutales y destructivas en nombre de una supuesta «unión nacional».

Es un falso patriotismo. Esas guerras no son las nuestras. ¡No vamos a pagarlas! ¡No vamos a morir por ellas!

Como decía el escritor francés Anatole France en la Primera Guerra Mundial: «creemos morir por la patria; morimos por unos industriales». Millones de personas murieron entonces, y es lo mismo que sucederá si no ponemos fin a este belicismo y al rearme. La clase dirigente europea libra ya una guerra vicaria en Ucrania y apoya el genocidio israelí contra el pueblo palestino.

Veamos los hechos:

- Un millón de muertos y heridos, en ambos bandos, en Ucrania y en Rusia;
- Decenas de miles de muertos y heridos en Palestina, en el intento de genocidio y limpieza étnica de toda la población.

Los principales beneficiarios son los fabricantes de armas y los que se aprovechan de la explotación de los recursos de Palestina y Ucrania. Pero nosotros no vamos a apoyar esta explotación.

Nosotros decimos:

- ¡NO a la guerra y a los ataques contra las conquistas sociales!
- ¡NO a los presupuestos de guerra y a los que la propician!
- ¡NO a las políticas de guerra, vengan de donde vengan!

Llamamos a la unidad de los pueblos de Europa, a la paz y no a la guerra; a la justicia y la igualdad y no a la explotación:

«¡Ni un céntimo, ni un arma, ni una vida humana para la guerra!»

